

205  
T. 59.

dio traslado de inmediato (fojas 126 vuelta) al demandado, en vez de esperar, como procedía, que éste a su vez expresara agravios. El demandado contestó el traslado y el tribunal proveyó la solicitud "Por evacuado el traslado conferido a fojas 126 vuelta". A continuación de este proveído la causa quedó paralizada por más de un año hasta que el demandado pidió el abandono de la instancia.

Por lo pronto, se advierte que la Corte, al error inicial de no esperar que el segundo apelante expresara agravios, no dispuso más tarde la medida que habría salvado esa omisión, o sea, ordenar al demandado que cumpliera el trámite.

El proceso quedó en adelante sin movimiento. Pero tal situación, y las circunstancias que la habían precedido, no eximían a las partes de su obligación de solicitar lo que correspondía con el objeto de que la causa prosiguiera su curso legal. Pensar de otro modo sería invertir la fisonomía del proceso civil, que por la iniciativa de las partes da comienzo a cada una de las etapas que lo constituyen. Ese es el principio general. Si la Corte de Apelaciones incurrió en una omisión, las partes debían instar para que ella fuera subsanada.

En segundo término, es preciso recordar que el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil no distingue entre la inactividad procesal que tiene su origen en omisiones del juez de la causa no reclamadas por las partes, de aquella producida por la simple desidia o inercia de los litigantes, por lo que debe estimarse que ambas llevan consigo el efecto propio del abandono de la instancia a que esa disposición se refiere.

Redactó el voto de mayoría el Ministro señor Servando Jordán L. y el disidente su autor.

Rogelio Muñoz Santibáñez. — Servando Jordán López. — Antonio Ljubetic Kirigin.

Don Edmundo Pisano B. recurrió en grado de queja ante la Corte Suprema.

#### La Corte:

Vistos:

Con el mérito de los fundamentos de la resolución de primera instancia escrita a fojas

144 vuelta de los autos seguidos por el Fisco con don Edmundo Pisano en el Juzgado de Letras de Magallanes, que se tienen a la vista, y del voto de minoría que se contiene en la resolución de fojas 158 de los mismos autos, se acoge el recurso de queja interpuesto por don Edmundo Pisano Blanco, a fojas 7, sólo en cuanto, dejándose sin efecto la mencionada resolución de 12 de abril último, escrita a fojas 158, se confirma la de 18 de noviembre del año pasado, que se lee a fojas 144 vuelta de los autos referidos.

Devuélvase la cantidad de E° 1,25 consignada.

Manuel Montero M. — Ramiro Méndez B. — Eduardo Varas V. — Enrique Urrutia M. — Víctor Ortiz C. — Urbano Marín R. — Darío Benavente G.

C. Suprema.—26 de julio de 1962.

C. del Trabajo.—29 de marzo de 1962.

Carnicero, Jorge y Jacqueline  
(recurso de queja).

(Incid: en la tercería de dominio deducida en los autos "Caja de Empleados Particulares con Sociedad de Transportes Aéreos ALA").

Compraventa condicional (contrato en el extranjero, efectos en Chile) — Reserva del dominio (compraventa condicional, contrato en el extranjero, efectos en Chile) — Efectos del contrato (cumplimiento en Chile, compraventa condicional) — Compraventa de aeronave (contrato en el extranjero) — Tercería de dominio (reserva del dominio, contrato en el extranjero) — Inscripción de aeronave (dominio, tercería de dominio) — Orden público (normas de; inscripción de nave aérea).

DOCTRINA.—Aunque las partes hayan pactado en el extranjero, en conformidad a las leyes de ese país, un contrato de compraventa condicional —que consiste en que el dominio de la cosa vendida (una nave aérea) subsista en el patrimonio del se cumplan las demás condiciones pactadas—, si agregaron a dicho contrato una cláusula, según la cual se autorizó la inscripción de la aeronave en el Registro de vendedor mientras no se pague el precio y Matrículas de Aeronavegación en Chile, a nombre del comprador, o sea de la sociedad ejecutada, esos efectos deben ajustarse a la legislación chilena.

En consecuencia, si la nave aérea materia de la tercera se encontraba inscrita a nombre de la ejecutada y tal inscripción se hallaba pendiente al tiempo del embargo, resulta evidente, con arreglo a los preceptos de los artículos 6.º, 7.º y 10 del decreto con fuerza de ley 221, de 30 de marzo de 1931, sobre Navegación Aérea —preceptos que son de orden público—, que la propiedad de la nave embargada es del ejecutado y no de los terceristas.

C. SUPREMA.—No incurre en falta o abuso la sentencia que contiene la doctrina que antecede.

Comparece don Juan del Villar Araya, factor de comercio, domiciliado Santiago, en representación de don Jorge y de doña Jacqueline Carnicero, según mandato que acompaña, e interpone demanda de tercería de dominio en contra de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, Institución de Previsión, domiciliada en Santiago, representada por su Vicepresidente Ejecutivo don Luis Undurraga Correa, abogado, del mismo domicilio, y en contra de la "Sociedad de Transportes Aéreos ALA Ltda.", sociedad comercial, domiciliada en Santiago, representada por don Osvaldo de Castro Larrain y don Manuel José Fernández

Larrain, abogados, del mismo domicilio, fundado en las siguientes consideraciones:

Que en los autos ejecutivos rol N.º 49.590, caratulados "Caja de Empleados Particulares con Sociedad de Transportes Aéreos ALA Ltda.", la ejecutante embargó a fojas 47 del cuaderno de apremio el avión cuadrimotor Douglas DC-4, matrícula CC-CAJ 0501, inscrito a fojas 848 del Registro Nacional de Matrícula de la Dirección de Aeronáutica de Chile, que fue la misma aeronave materia del contrato de venta condicional entre dicha Sociedad y sus mandantes don Jorge y doña Jacqueline Carnicero, contrato que fue inscrito como tal en el Registro Nacional de Matrícula de la Dirección de Aeronáutica.

Que la aeronave individualizada pertenece a los citados señores Carnicero a virtud de la cláusula número tres del contrato de venta condicional, que establece que el título de la aeronave mencionada no será traspasado al comprador al entregarla, sino que permanecerá en poder del vendedor hasta que se hayan efectuado todos los pagos y cumplido todas las condiciones.

Que tanto el derecho de propiedad que se reserva el vendedor en el contrato de venta condicional, como el derecho correlativo de comprador de la aeronave para adquirir esa misma propiedad por compra, fueron incorporados a la Convención de Ginebra de 1948, sobre reconocimiento internacional de derechos sobre aeronaves, cuyo artículo primero establece que "Los Estados contratantes se comprometen a reconocer: a) el derecho de propiedad sobre aeronaves; b) el derecho acordado al tenedor de una aeronave a adquirir su propiedad por compra".

Que el citado Convenio de Ginebra de 1948 es ley en nuestro territorio nacional en virtud de la aprobación legislativa de fecha 4 de septiembre de 1951, cuyo instrumento de ratificación fue extendido el 18 de octubre del mismo año y depositado en la Oficina de la Organización de Aviación Civil Internacional el 18 de diciembre de 1955. La promulgación se efectuó por Decreto N.º 553 de 21 de diciembre de 1955 y fue publicado en el Diario Oficial con fecha 7 de septiembre de 1959.

Por lo expuesto, documentos que acompaña y lo preceptuado en los artículos 518, 521,

522 y  
y artícu  
nebra,  
ta dem  
de la  
sentada  
contra  
Ltda.,  
individ  
declara  
matricu  
Regist  
nautica  
ejecuti  
Jorge  
la Soci  
be dej  
oficián  
de qua  
cho en  
Matric  
con co  
a los  
A f  
tílo co  
ja de  
la par  
La  
lares  
agreg  
comp  
testad  
En  
Previs  
Qu  
costas  
trícul  
la "L  
Ltda.  
minic  
neral  
dad a  
Ley  
blicac  
mes  
ment  
Qu  
ta co  
form  
a lo  
del I

522 y 523 del Código de Procedimiento Civil y artículo 1.º de la citada Convención de Ginebra, termina solicitando tener por interpuesta demanda de tercería de dominio en contra de la Caja de Empleados Particulares, representada por su Vicepresidente Ejecutivo y en contra de la Sociedad de Transportes ALA Ltda., representada por sus gerentes, todos ya individualizados; y en definitiva acogerla y declara que el avión marca Douglas DC-4 con matrícula CC-CAJ, inscrito a fojas 848 del Registro de Matrícula de la Dirección de Aeronáutica, embargado a fojas 47 de los autos ejecutivos mencionados es de propiedad de don Jorge y de doña Jacqueline Carnicero y no de la Sociedad ejecutada, y que, en definitiva, debe dejarse sin efecto y alzarse sin más trámites oficiándose a la Dirección de Aeronáutica a fin de que proceda a cancelar la anotación de dicho embargo en el correspondiente Registro de Matrícula a que se ha hecho referencia, todo con costas, en que se condenará solidariamente a los demandados.

A fojas 26 tuvo lugar el comparendo de estilo con asistencia de los apoderados de la Caja de Previsión de Empleados Particulares y de la parte tercerista y en rebeldía de la ejecutada.

La Caja de Previsión de Empleados Particulares contestó la tercería por escrito el que se agregó a los autos como parte integrante del comparendo, proveyéndose: téngase por contestada la demanda.

En su escrito de contestación la Caja de Previsión de Empleados Particulares sostiene:

Que la tercería debe ser desestimada con costas por cuanto el avión Douglas DC-4, matrícula CC-CAJ N.º 0501, es de propiedad de la "Sociedad de Transportes Aéreos ALA Ltda.", según aparece de la inscripción de dominio vigente a su nombre en la Dirección General de Aeronáutica, todo ello en conformidad a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N.º 221, de 15 de mayo de 1931, publicado en el Diario Oficial de 30 del mismo mes y año, sobre Navegación Aérea, especialmente en sus artículos 3.º, 5.º y 6.º.

Que la cláusula tercera del contrato de venta condicional no tiene valor alguno en conformidad a la ley chilena, especialmente frente a lo que disponen los artículos 2.º, 5.º y 6.º del Decreto con Fuerza de Ley N.º 221, ya

citados, y de lo que previene el artículo 1874 del Código Civil, que establece que la cláusula de no transferir el dominio "sino a virtud de la paga del precio" no produce otro efecto que el de la demanda alternativa indicada en el artículo 1873, disposición que es obligatoria en el caso de autos, conforme a lo que se establece en el artículo 16 del mismo Código, ya que el avión Douglas está situado en Chile y por ello se sujeta a las leyes chilenas, lo que se confirma con el inciso final del mismo precepto.

Que en la Convención de Ginebra no hay nada que contradiga las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley N.º 221 y del Código Civil, ya citadas, como tampoco no hay en ella ninguna norma que consagre la validez de la cláusula de venta condicional, ni mucho menos, que permita aplicarla contra texto expreso de la ley chilena que la prohíbe.

Que cabe concluir que tampoco ha probado el tercerista ser el dueño de la especie y, antes por el contrario, ha acreditado ser solamente el vendedor.

Que por otra parte, no debe olvidarse que ALA es el poseedor del avión, que es una especie mueble, y que esta posesión regular trae dos consecuencias jurídicas: a) que ALA es reputada dueña de la especie, mientras otra persona no justifique serlo, según el artículo 700, inciso 2.º del Código Civil; y b) que ALA ha adquirido por prescripción adquisitiva la especie reclamada por haber transcurrido con exceso el plazo previsto en el artículo 2508 del mismo Código.

En mérito de lo expuesto y de las disposiciones legales citadas, termina solicitando tener por contestada la tercería de autos y, en definitiva, negar lugar a ella en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Avenimiento no se produjo. Se recibió la causa aprueba fijándose el siguiente hecho controvertido: "1.º Si la aeronave embargada a fojas 47 del cuaderno de apremio, avión cuadrimotor Douglas DC-4, matrícula CC-CAJ N.º 0501, inscrita a fojas 848 del Registro Nacional de Matrícula de la Dirección de Aeronáutica de Chile, es de la Sociedad ejecutada, Sociedad de Transportes Aéreos ALA Ltda. o de los terceristas don Jorge y doña Jacqueline Carnicero". Se rindió la prueba do-

cumental y pericial que roía en autos. A fojas 96 vuelta se declaró cerrado el proceso.

Considerando:

1.º Que para resolver con acierto en esta tercera, el Tribunal debe pronunciarse, previamente, en tres cuestiones fundamentales que han sido debatidas por el tercerista y la parte ejecutante. Estas son:

a) Si el contrato de venta condicional de aeronave, que le sirve de fundamento a la tercera, y cuya traducción se acompaña a fojas 1 de estos autos, tiene o no validez en Chile;

b) Si el referido contrato de venta condicional de aeronave, se celebró en conformidad a la ley del país en que se otorgó; y

c) Si el documento en que consta dicho contrato tiene la calidad de instrumento público;

2.º Que en la primera cuestión, signada con la letra a) del considerando anterior, el Tribunal da por establecido de antemano lo siguiente:

1.º Que el contrato en referencia se celebró en el extranjero, ya que fue otorgado en el Estado de Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica;

2.º Que es un contrato relativo a bienes que se encontraban en el extranjero en el momento de su celebración, como se desprende de la cláusula primera de dicho contrato; y

3.º Que es un contrato que ha de producir sus efectos en el extranjero, o sea en los Estados Unidos de Norteamérica, entendiéndose por efectos del contrato, los derechos y obligaciones que de él emanan para las partes, dado lo que consta en las cláusulas primera y décimo novena, en las que el comprador declara el recibo y la aceptación de la aeronave y se dispone que los pagos serán hechos por intermedio del Riggs National Bank, Washington, D. C., a la cuenta del vendedor, o en cualquier otro lugar que designe el vendedor por escrito, respectivamente;

3.º Que, a este respecto, debe tenerse presente que las partes que celebraron en el extranjero el referido contrato tenían la facultad de elegir la ley que debía regir las obligaciones que iban a nacer de tal acto jurídico, de conformidad al principio de la autonomía de la voluntad, que es aceptado por el Derecho Internacional Privado, siempre que exista la po-

sibilidad de que se plantee un conflicto de leyes, siempre que el contrato afecte sólo al interés privado, siempre que no haya violación del orden público y no se refiera a la sucesión de los contratantes, requisitos todos que se cumplen en el caso de autos;

4.º Que cualquiera que sea el alcance que se le dé a la cláusula vigésimo primera del contrato acompañado a estos autos, sea que se interprete en el sentido de que las partes quisieron que fuera la legislación del Estado de Florida la que rija en el contrato, lo que se conforma al principio mencionado de autonomía de la voluntad, sea que se le interprete en sentido contrario, o sea, no dándole ese alcance a la cláusula en referencia, se llega a la conclusión que debe aplicarse a este caso la legislación norteamericana y no la legislación chilena, interpretando la voluntad presunta de las partes mediante la ponderación de las circunstancias o elementos objetivos del contrato: a) la cláusula vigésimo primera, que establece que dicho contrato será interpretado de acuerdo con las leyes del Estado de Florida; b) el lugar de la celebración del contrato; y c) el lugar en que éste produce sus efectos;

5.º Que, en todo caso, sea que se aplique la legislación del Estado de Florida, sea que se aplique la legislación de cualquier otro de los Estados que componen los Estados Unidos de Norteamérica, el resultado será siempre el mismo: la validez del contrato de venta condicional de aeronave celebrado entre los terceristas y la Sociedad de Transportes Aéreos "ALA" Ltda., y por consiguiente, de su cláusula tercera; ya que, como lo señala el informe pericial de fojas 80, que es un medio de prueba legal, "en los Estados Unidos de Norteamérica existe un contrato que era desconocido por nuestra legislación, contrato que se denomina "De venta condicionada", "De venta bajo condición" o "De venta condicional". Este contrato tiene en ese país enorme aplicación práctica, no sólo en materia aeronáutica, sino también en otros actos y contratos, como es el de compraventa de automóviles, por ejemplo";

6.º Que si bien es cierto que en el inciso 1.º del artículo 16 del Código Civil chileno se expresa textualmente que "Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas,

aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile", en el inciso 2.º de la misma disposición legal, que es una excepción al inciso 1.º citado, se preceptúa que "Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño", circunstancia esta última que ha quedado de manifiesto en los considerandos anteriores. Es necesario tener presente además, que el inciso 3.º del citado artículo 16, que dispone que "los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile, se arreglarán a las leyes chilenas", no se aplica al caso particular analizado, por cuanto el contrato de venta condicional de aeronave celebrado entre los terceristas y la Sociedad de Transportes "ALA" Ltda. produce sus efectos en Norteamérica y no en Chile, como se ha señalado anteriormente;

7.º Que, a mayor abundamiento, debe considerarse que en el artículo 1545 del Código Civil se expresa que "todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes contratantes", principio que aparece repetido en el artículo 166 del Código Bustamante, en el cual se expresa textualmente: "Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos, salvo las limitaciones establecidas en este Código";

8.º Que con las disposiciones legales y los principios generales de Derecho Internacional Privado que se han invocado precedentemente, se llega a concluir que el citado contrato de venta condicional de aeronave celebrado entre los terceristas y la Sociedad de Transportes Aéreos "ALA" Ltda. tiene perfecta validez en Chile, no siendo necesario en consecuencia, para fundamentar su validez, recurrir a los preceptos contenidos en la Convención de Ginebra de 1948, sobre Reconocimiento Internacional de Derechos sobre Aeronaves, que por lo demás, fue publicado en el Diario Oficial el 7 de septiembre de 1959, y por tanto quedó incorporada al ordenamiento jurídico chileno con una fecha posterior al de la celebración del referido contrato;

9.º Que en la cuestión indicada con la letra b) del considerando primero, esto es, si el mencionado contrato de venta condicional de

aeronave se celebró en conformidad a la ley del país en que se otorgó, debe distinguirse entre el aspecto de fondo y el aspecto de forma del contrato. Desde luego, con lo ya expresado anteriormente, se concluye que el referido contrato, en cuanto al fondo, se celebró en conformidad a la ley del país en que se otorgó, esto es, de los Estados Unidos de Norteamérica;

10. Que en cuanto al aspecto de forma, debe estarse primero a lo preceptuado en el artículo 17 del Código Civil chileno: "La forma de los instrumentos públicos se determina por la Ley del país en que hayan sido otorgados", agregándose en el inciso segundo de dicho artículo: "La forma se refiere a las solemnidades externas... etc.". Debe tenerse presente a este respecto que el citado artículo 17 del Código Civil no solo determina la ley aplicable a la forma de los instrumentos públicos, sino también la que reglamenta la forma de todo acto o contrato general;

11. Que, en cuanto a la forma del contrato de venta condicional de aeronave en Estados Unidos de Norteamérica, país en que fue otorgado, en el informe pericial de fojas 80 se expresa textualmente: "El contrato es solemne, ya que para su celebración exige la presencia de un Notario competente, que, bajo su sello y firma debe certificar: a) la individualización de las partes y su domicilio; b) las características de la aeronave (número, tipo, marca, etc.); c) el lugar de la celebración del contrato y el lugar donde se mantendrá la especie vendida, etc.". Con la traducción oficial de dicho contrato que rola a fojas 1, el Tribunal llega a la conclusión que se cumplen en él todas las condiciones que debe reunir el contrato de venta condicional de aeronave que se examina y que éste se celebró, en cuanto al aspecto de forma, asimismo en conformidad a la ley del país en que se otorgó;

12. Que con todo lo anteriormente expuesto, y teniendo presente además que no se ha probado en autos el pago total del precio de venta de la aeronave, queda suficientemente probado el dominio de los terceristas sobre el avión DC-4, disputado en estos autos y que, por lo tanto, debe acogerse la tercera deducida a fojas 2;

13. Que en la cuestión indicada en la letra c) del considerando primero, esto es, si el ins-

trumento en que consta el contrato varias veces mencionado, de venta condicional de aeronave, tiene la calidad de instrumento público, el Tribunal, con el mérito del informe pericial de fojas 80 y con las certificaciones que constituyen la legalización de ese documento, tiene por establecido lo siguiente: a) que fue autorizado por el señor Howard V. Bullis, Notario Público del Estado de Nueva York, o sea, que fue autorizado por un funcionario; b) que el Notario del Estado de Nueva York, ya nombrado, era competente para autorizar el instrumento, lo que consta en la certificación colocada por el James Mc. Gurrin, Secretario del Condado y Secretario de la Corte Suprema del Condado de Nueva York; y c) con lo expuesto en el undécimo considerando, que ese documento fue autorizado con las solemnidades legales, toda vez que de acuerdo con el inciso segundo del artículo 17 del Código Civil, las solemnidades dicen relación con la forma de los instrumentos públicos, y, en consecuencia, ellas se determinan por la ley del país en que hayan sido otorgados. Tiene, por consiguiente, el referido documento, la calidad de instrumento público o auténtico, por cuanto fue autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario y, toda vez que el juicio rol N.º 49.590, caratulado: "Caja de Previsión de Empleados Particulares con Sociedad Transportes Aéreos "ALA" Ltda.", en que incide la tercera, fue iniciado el día 7 de junio de 1958, esto es, con una fecha posterior a la de la celebración del contrato, procede rechazar el recurso de reposición de la resolución recaída en el 2.º otrosí del escrito de fojas 2, —corriente a fojas 5— deducido por la parte ejecutante, para que se deje sin efecto la suspensión del procedimiento de apremio de la ejecución antes referida.

Y visto, además, lo que se dispone en los artículos: 166 de Código Bustamante; 16, 17, 18, 1545 y 1699, inciso 1.º del Código Civil; 518 y 523 del Código de Procedimiento Civil; y 497, 538 y 540 del Código del Trabajo, se declara: a) Que ha lugar a la tercera de dominio deducida a fojas 2 y que, por lo tanto, se ordena alzar el embargo sobre los bienes reclamados por los terceristas; y b) Que no da lugar a la reconsideración pedida por la parte ejecutante a fojas 6, por la cual se soli-

citó que se dejara sin efecto la resolución de fojas 5, que accedió a la suspensión del procedimiento de apremio en la ejecución en que incide la tercera de dominio.

Cada parte pagará sus costas y por mitad las comunes.

Arturo Bustamante Alfaro.

Apeado este fallo,

#### La Corte:

##### Vistos:

Reproduciendo la parte expositiva y las citas legales de la sentencia apelada, de 29 de agosto último, escrita a fojas 91 y siguientes y teniendo presente:

1.º Que para acreditar el fundamento de su petición primera, esto es, que se declare que el avión embargado en estos autos ejecutivos es de su dominio y no del ejecutado, los terceristas han invocado el mérito del documento en que consta el contrato de compraventa condicional que celebraron en Washington D. C., Estados Unidos de Norte América y cuya traducción corre a fojas 1 de estos antecedentes;

2.º Que, según la cláusula 3.ª de ese contrato, el título del avión no sería traspasado al comprador, esto es, al ejecutado, hasta que se hubiesen efectuado todos los pagos parciales del precio y cumplido las demás condiciones convenidas;

3.º Que ha alegado el tercerista que la institución de compraventa condicional tiene plena eficacia en nuestro país, en virtud de la incorporación que de ella se hizo en la Convención de Ginebra de 1948, la que fue aprobada por nuestro Legislador en septiembre de 1951 y ratificada por nuestro Gobierno por instrumentos de octubre del mismo año;

4.º Que es efectivo lo expresado en la sentencia apelada, en el sentido de que el aludido contrato de compraventa condicional se celebró en un país extranjero, con arreglo a una legislación que acepta ese tipo de convención. Puede también darse por establecido que los efectos de ese contrato, que son de la naturaleza de la compraventa, debían cumplirse en aquel país; pero es también un hecho del juicio que las partes introdujeron en su convenio una cláusula que no es de la naturaleza del contrato de compraventa, pero que ha produ-

cido efectos, y no en el país de otorgamiento, sino en Chile, lo que lleva a la conclusión de que, contrariamente a lo establecido en la sentencia referida, esos efectos deben ajustarse a la Legislación chilena, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 16 del Código Civil;

5.º Que, efectivamente, por la cláusula 17.ª del contrato en estudio, las partes contratantes autorizaron la inscripción de la aeronave vendida en el registro de matrículas de aeronavegación de Chile, a nombre del comprador, y su explotación en este país por la misma persona. Indiscutible resulta que esa inscripción, convenida expresamente en el contrato, constituye uno de los efectos del mismo y que se ha producido en Chile; por lo demás, el propio tercerista pone de manifiesto esta circunstancia, al señalar a fojas 3, que la inscripción no significó el resultado de una iniciativa independiente de la ejecutada, sino que fue una consecuencia del acuerdo expreso de las partes;

6.º Que, según se ha anticipado ya, la circunstancia apuntada altera fundamentalmente la situación legal del bien objeto de la tercería, puesto que, como en el propio planteamiento de la sentencia apelada se reconoce, deben serle aplicadas a él las normas de nuestra legislación, aún cuando haya sido objeto de un contrato válidamente celebrado en el extranjero, en cuanto diga relación con los efectos de ese contrato que deban cumplirse en Chile, de acuerdo con la norma contenida en el inciso 3.º del artículo 16 del Código Civil;

7.º Que en efecto, esa disposición expresa: "Pero los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile, se arreglarán a las leyes chilenas". Las leyes chilenas aplicables en este caso están contenidas en el Decreto con Fuerza de Ley N.º 221, de 30 de marzo de 1931 sobre Aeronavegación y Dirección de Aeronáutica, y de ellas se deduce la inequívoca conclusión de que para nuestra legislación la inscripción de una aeronave chilena en el registro de matrícula de la Dirección de Aeronáutica (acto que esa Dirección puede o no aceptar, en virtud de atribuciones privativas) constituye un reconocimiento del dominio que sobre ese bien tiene la persona natural o jurídica a cuyo nombre se efectúa esa inscripción;

8.º Que es así como el artículo 6.º de ese

Decreto con Fuerza de Ley señala los requisitos que debe cumplir el que desea inscribir una aeronave y expresa: "Para inscribir una aeronave en el registro de matrícula de la Dirección de Aeronáutica, la que podrá aceptar o no la inscripción solicitada, una copia autorizada del contrato, sentencia u otro justo título de propiedad";

9.º Que por su parte, el artículo 10 exige que "cualquiera transmisión de propiedad por la que se transfiera constituya o declare la propiedad deberá inscribirse en el registro de matrícula a petición del nuevo propietario". Y el artículo 7.º exige que "para ser dueño de una aeronave chilena se requiere ser ciudadano natural o legal de la República";

10. Que las partes han estado de acuerdo en que la aeronave materia de esta tercería, fue inscrita en Chile, en el registro de matrícula de la Dirección de Aeronáutica, a nombre de la sociedad ejecutada, y es también un hecho indiscutido que tal inscripción se encontraba vigente en el momento de trabarse el embargo en los autos. Como, según se señaló ya, es éste uno de los efectos del contrato de compraventa invocado por el tercerista al que deben serle aplicadas las normas de nuestra legislación, resulta evidente que, en virtud de las disposiciones transcritas, que son de orden público, el propietario de la aeronave embargada es el ejecutado y no los terceristas;

11. Que resulta innecesario, en virtud de lo expresado, analizar las alegaciones de esos terceristas acerca de la posible eficacia que en nuestro país pueda tener la cláusula de venta condicional y sobre la vigencia de la Convención de Ginebra de 1948, porque se refieren a una situación que pudo derivarse de la celebración del contrato invocado como fundamento de la tercería, si en él no se hubiere incluido la cláusula 17.ª ya estudiada, pero que ha resultado superada por el hecho de que en realidad se la incluyera, produciendo el efecto de la inscripción de la aeronave en Chile, con las consecuencias que se acaban de señalar;

12. Que, por lo expuesto, es preciso concluir que la parte tercerista no ha logrado acreditar que la aeronave objeto del embargo en esta causa sea de su dominio, por lo que debe negarse lugar a su demanda de fojas 2.

Se revoca la referida sentencia en cuanto,

por la declaración a), acoge la tercería de dominio de fojas 2. y se declara que se rechaza dicha tercería. Se confirma en lo demás la sentencia apelada.

El Ministro suplente, señor Fernando Díaz Arismendi, estuvo por confirmar en todas sus partes la sentencia apelada en virtud de sus mismos fundamentos.

Redacción del Ministro don Hernán Zapata Díaz. No firma el señor Fernando Díaz Arismendi, no obstante haber concurrido al acuerdo, por haber dejado de ser Ministro suplente de esta Corte. — *Hernán Zapata D. — Andrés Soto R.*

En contra de este fallo el tercerista recurrió de queja ante la Corte Suprema,

#### La Corte:

##### Vistos:

Por no existir falta ni abuso, se declara sin lugar el recurso de queja deducido a fojas 2 por don Jorge y doña Jacqueline Carnicero.

Se aplica a beneficio fiscal la cantidad de setenta y cuatro escudos, doble de la suma consignada.

*Manuel Montero M. — Ramiro Méndez B. — Eduardo Varas V. — Enrique Urrutia M. — Víctor Ortiz C. — Urbano Marín R. — Leopoldo Ortega N.*

*Cas. forma. — 26 de julio de 1962*

Cerpa, Ramón con Lobos, Osvaldo

Decisiones contradictorias (prescripción adquisitiva desechada en primera instancia, prescripción adquisitiva acogida en segunda instancia) — Prescripción adquisitiva (manera de alegarla, decisiones contradictorias).

DOCTRINA.—*La decisión de confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto rechaza la prescripción adquisitiva, porque es necesario que se deduzca por vía reconvenicional y no en forma de incidente, y la de acoger la prescripción adquisitiva invocada en segunda instancia, porque puede alegarse en cualquier estado de juicio, no obstante haberse deducido también como incidente, sin que mediara reconvenición, son dos decisiones que pugnan entre sí, y que hace que el fallo recurrido adolezca del vicio a que se refiere la causal séptima del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, porque contiene resoluciones contradictorias (1).*

Don Ramón Cerpa entabló demanda en juicio reivindicatorio en contra de don Osvaldo Lobos, diciendo que era dueño del fundo "Angostura" colindante con el predio del demandado denominado "San Cayetano" y que entre ambos predios existía un retazo de terreno de más o menos diez cuadradas de extensión, que estaba ocupado por el demandado pero que era parte de su fundo, puesto que ambos predios se encontraban separados por el camino público y este terreno quedaba entre su fundo y el camino y por lo tanto le pertenecía. Pedía le fuera restituído y cobraba además indemnización de perjuicios.

Contestando la demanda don Osvaldo Lo-

(1) Sobre la manera procesal de alegar la prescripción, véase esta Revista, tomo LIV, 2.ª parte, sección 1.ª, página 71 bis y la nota (4) puesta a su doctrina.